

1.19. PERSPECTIVA DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
(pp. 2-14)

—

**1.19. PERSPECTIVA DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT (pp. 15-
26)**

SUSANA BORRÀS PENTINAT

*Profesora colaboradora de Derecho Internacional Público / Professora col·laboradora de
Dret Internacional Públic*

Universitat Rovira i Virgili

Sumario: 1. El Acuerdo de Copenhague. 2. El Proyecto de Protocolo de Nagoya de acceso a los recursos genéticos y de participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización.

La capítulo dedicado a la crónica jurídica internacional de este primer número de la *Revista Catalana de Dret Ambiental* ofrece un análisis de los documentos más significativos que se han adoptado en los últimos seis meses: el Acuerdo de Copenhague y el Proyecto de Protocolo de Nagoya de acceso a los recursos genéticos y de participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. Estos documentos, en distinta medida, representan un avance en las negociaciones internacionales en el ámbito de dos regímenes de protección del medio ambiente, a saber, el del cambio climático y el de la diversidad biológica. Aunque en sí mismos no representan documentos internacionales jurídicamente vinculantes, constituyen un desarrollo significativo de estos ámbitos de regulación y una contribución considerable a la futura adopción de acuerdos multilaterales.

1. El Acuerdo de Copenhague

Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros y otros jefes de las delegaciones presentes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2009, celebrada en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009, adoptaron el llamado Acuerdo de Copenhague el 18 de diciembre de 2009¹. El objetivo de la Conferencia de Copenhague era lograr un acuerdo, jurídicamente vinculante, que permitiera a las Partes en la Convención Marco sobre Cambio Climático² y el Protocolo de Kioto³ asumir nuevos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el período posterior al estipulado en el Protocolo de Kyoto, que expira en 2012, es decir, a partir del 2013.

No obstante, el Acuerdo de Copenhague se adoptó a modo de decisión “taking note”, es decir, “se tendrá en consideración”, lo que refleja la falta de compromiso jurídico, pero con la

¹ Conference of the Parties, Fifteenth session, Draft decision -/CP.15, Copenhagen, 7-18 December 2009. FCCC/CP/2009/L.7 18 December 2009. Disponible en http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf.

² La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, 31 ILM 822. El Instrumento de Ratificación de España se publicó en *BOE* de 1 de febrero de 1994.

³ El Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 (37 ILM 22 (1998)) entró en vigor el 16 de febrero de 2005. El instrumento de Ratificación de España se publicó en *BOE* 8 de febrero de 2005, Núm. 33.

voluntad de lograr el objetivo establecido en el artículo 2 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, a saber, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

El Acuerdo se divide en doce apartados, entre los cuales, hay seis declaraciones y las seis restantes son compromisos.

Los tres primeros apartados son declaraciones. En la primera, después de reconocer que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, se hace hincapié en la voluntad política de combatir de forma urgente el cambio climático, de conformidad con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y con las capacidades respectivas. Para lograr el objetivo último de la Convención, reconociendo el punto de vista científico de que el aumento de la temperatura mundial debería ser inferior a 2 grados Celsius, y de acuerdo con la equidad y el desarrollo sostenible, se constata la necesidad de mejorar la cooperación a largo plazo para combatir el cambio climático y por eso se propone el establecimiento de un programa de adaptación global que incluya el apoyo internacional, conscientes de los impactos críticos del cambio climático y los impactos potenciales de las medidas de respuesta en los países particularmente vulnerables a sus efectos adversos.

La segunda declaración se refiere a la necesidad de reducción drástica de las emisiones mundiales para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados, en consonancia con la ciencia y sobre la base de la equidad y teniendo en cuenta que el desarrollo social y económico y la erradicación de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo. La cooperación, según este Acuerdo, permitirá alcanzar el pico máximo de emisiones mundiales y nacionales tan pronto como sea posible, reconociendo que el plazo para ese pico será más prolongado en los países en desarrollo y que una estrategia de emisiones bajas es indispensable para el desarrollo sostenible.

La tercera declaración se refiere a que los países desarrollados deben proporcionar a los países en desarrollo tanto recursos financieros adecuados como la tecnología y la creación de capacidad. Esta provisión de recursos permitiría a estos países una mejor adaptación a los efectos adversos del cambio climático y los impactos potenciales de las medidas de respuesta.

Se constata la necesidad urgente de reforzar la actuación y la cooperación internacional en materia de adaptación para garantizar la aplicación de la Convención, para facilitar y apoyar la aplicación de las medidas de adaptación dirigidas a reducir la vulnerabilidad de los países en desarrollo, especialmente en aquellos que son particularmente vulnerables, y sobre todo en los países menos adelantados, los estados insulares en desarrollo y África.

El cuarto, se presenta como compromiso para los países desarrollados (Partes del anexo I) de presentación de objetivos de reducción, no de su ejecución. En concreto, se refiere a que los países desarrollados se comprometan a ejecutar los objetivos cuantificados de emisión para 2020 que serán presentados antes del 31 de enero de 2010. El Acuerdo establece en este compromiso que las Partes del anexo I que son Partes en el Protocolo de Kyoto deberán fortalecer aún más la reducción de las emisiones iniciada con el Protocolo de Kyoto. El compromiso de reducciones y la financiación por parte de los países desarrollados serán medidas, comprobadas y verificadas, de conformidad con las directrices actuales y con las que adopte la Conferencia de las Partes, y se asegurará de que la contabilidad de dichos objetivos y la financiación sean rigurosas, sólidas y transparentes.

El quinto apartado es una declaración según la cual los países en desarrollo (Partes no-Anexo I) de la Convención aplicarán medidas de mitigación, incluyendo aquellas que se presentarán a la secretaría por dichas Partes, antes del 31 de enero de 2010. Respecto a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares pueden emprender acciones de manera voluntaria y con base en un apoyo internacional. Las medidas que requieran apoyo internacional estarán sujetas a la medición internacional, la notificación y la verificación, de las cuales se informará a través de sus comunicaciones nacionales cada dos años en conformidad con las directrices aprobadas por la Conferencia de las Partes. En concreto, el Acuerdo establece que las medidas de mitigación que sean posteriormente adoptadas y previstas por las Partes no-Anexo I, incluidos los informes de inventario nacional, se comunicarán a través de las comunicaciones nacionales de conformidad con el artículo 12.1 (b) cada dos años, basándose en las directrices que adopte la Conferencia de las Partes. Las Partes no-Anexo I comunicarán la información sobre la ejecución de sus acciones a través de las comunicaciones nacionales, con disposiciones para celebrar consultas y análisis internacionales en virtud de directrices claramente definidas que aseguren el respeto de la soberanía nacional. Las medidas de mitigación nacionales apropiadas que requieran apoyo

internacional se inscribirán en un registro junto con la tecnología pertinente, la financiación y el apoyo a la creación de capacidad.

El apartado sexto es una declaración en la que se reconoce el papel fundamental de la reducción de emisiones procedentes de la deforestación y de la degradación forestal y se está de acuerdo con la necesidad de ofrecer incentivos positivos a esas acciones mediante el establecimiento inmediato de un mecanismo que incluya a REDD-plus (reducción de emisiones procedentes de la deforestación tal como se definió en la hoja de ruta de Bali), para permitir la movilización de recursos financieros desde los países desarrollados.

El apartado séptimo también es una declaración donde se establece la aplicación de distintos criterios, incluyendo las oportunidades de utilización de los mercados, con el fin de mejorar la relación coste-eficacia de las medidas de mitigación, y para promoverlas. Según esta declaración, los países en desarrollo, especialmente aquellos con economías de baja emisión, deben proporcionar incentivos para continuar desarrollando un camino de bajas emisiones.

El apartado octavo del Acuerdo es un compromiso de financiación de los países desarrollados de proporcionar a los países en desarrollo, unos 30.000 millones de dólares para el período 2010-2012 y, como meta a alcanzar de forma progresiva, 100.000 millones de dólares al año en 2020 para atender las necesidades de los países en desarrollo y con el fin de mejorar y apoyar la acción sobre la mitigación, incluyendo la financiación sustancial para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD-Plus), la adaptación, el desarrollo y transferencia de tecnología y la creación de capacidad, para mejorar la aplicación de la Convención. Este es, según el Acuerdo, un compromiso colectivo de los países desarrollados de proporcionar recursos nuevos y adicionales, incluida la silvicultura y las inversiones a través de instituciones internacionales con un reparto equilibrado entre la adaptación y mitigación. La financiación para la adaptación será prioritaria para los países en desarrollo más vulnerables, como son los países menos adelantados, los pequeños estados insulares y África. Este compromiso de financiación se articulará mediante fondos provenientes de una amplia variedad de fuentes, públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas las fuentes alternativas de financiación. El Acuerdo propone una nueva financiación multilateral para la adaptación que será proporcionada a través de acuerdos financieros eficaces y eficientes, con una estructura de gestión que prevé la igualdad

de representación de los países desarrollados y en desarrollo. Una parte significativa de dicha financiación debe fluir a través del Fondo Verde del Clima de Copenhague.

En el apartado noveno se establece el compromiso de las Partes de crear un Grupo de Alto Nivel para estudiar la contribución de las fuentes potenciales de ingresos, incluidas las fuentes alternativas de financiación, para el cumplimiento de este objetivo.

El apartado 10 define el compromiso de las Partes de crear el Fondo Verde del Clima de Copenhague que se constituirá como una entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención para apoyar proyectos, programas, políticas y otras actividades en los países en desarrollo relacionadas con la mitigación, como son el REDD-Plus, la adaptación, la creación de capacidad y el desarrollo y transferencia de tecnología.

Junto con el compromiso financiero, el punto 11 establece el compromiso de establecer un mecanismo de tecnología, con el fin de mejorar la acción en el desarrollo y la transferencia de tecnología, teniendo en cuenta un enfoque impulsado por los países y estará basado en las circunstancias y prioridades nacionales y así apoyar a las medidas de adaptación y de mitigación.

Finalmente, el Acuerdo termina con un compromiso difuso, en base al cual en 2015 se hará una evaluación de la aplicación de este Acuerdo y se da a entender que se podrían establecer medidas de fortalecimiento de la meta a largo plazo teniendo en cuenta los diversos asuntos presentados por la ciencia para reducir el aumento máximo de la temperatura global de 2 a 1,5 grados centígrados.

Con todo, resulta decepcionante que los esfuerzos realizados a lo largo de tantos años de negociaciones climáticas dirigidas a lograr un compromiso global y jurídicamente vinculante haya concluido con un texto llamado “Acuerdo”, cuya naturaleza jurídica y contenido denotan, precisamente, la falta de compromiso jurídico. La vaguedad de los términos en que se redacta este Acuerdo no es más que la constatación, por una parte, de una realidad frustrante, en particular, para los países más vulnerables a las consecuencias del cambio climático y por otra, de la conveniencia de aquéllos países reticentes a realizar renuncias y/o contraprestaciones en relación a lo que se supone es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad. Al fin y al cabo, el medio ambiente no se protege con meras declaraciones de intenciones, ni como es el caso con “tomar nota” de una realidad más que evidente.

2. El Proyecto de Protocolo de Nagoya de acceso a los recursos genéticos y de participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización

En virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992⁴ se reconoce la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales en áreas dentro de su jurisdicción, es decir, las Partes del Convenio tienen la potestad para determinar el acceso a los recursos genéticos en áreas dentro de su jurisdicción. En concreto, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos es uno de los tres objetivos fundamentales del Convenio y además, en su artículo 15 se reconoce expresamente el acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios que se deriven de su utilización. Esta disposición fue detallada en la decisión VI/24 de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en la que se adoptaron las Directrices de Bonn sobre acceso a los recursos genéticos y distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de su utilización. También, el Plan de Aplicación adoptado por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, septiembre de 2002), exhortó a las Partes a tomar medidas para negociar, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y teniendo presentes las Directrices de Bonn, la creación de un régimen internacional para promover y salvaguardar de forma eficaz la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

Siguiendo este mandato, en la novena reunión del Grupo de Trabajo sobre acceso y participación justa en los beneficios (WGABS 9) que se celebró en Cali, Colombia del 22 al 28 de marzo 2010⁵, siendo la última de tres reuniones previstas por mandato de la novena reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Bonn, (Alemania), en mayo de 2008, se ultimaron las negociaciones de un régimen internacional sobre el acceso a los recursos genéticos y de participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización, que debe ser adoptado de acuerdo con la Decisión IX/35, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10) se celebrará en Nagoya, Japón, en octubre de 2010⁶. El resultado es el “Proyecto revisado de Protocolo al Convenio sobre la diversidad biológica

⁴ Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, de 5 de junio de 1992 (31 ILM 818) entró en vigor el 29 de diciembre de 1993). El instrumento de ratificación de España es de 16 de noviembre de 1993 y se publicó en BOE núm. 27, de 1 de febrero de 1994. Más información: <http://www.cbd.int/>.

⁵ *Report of the First Part of the Ninth Meeting of the Ad Hoc Open Ended Working Group On Access and Benefit-Sharing*, UNEP/CBD/WG-ABS/9/3.

⁶ El texto de proyecto de protocolo está disponible en: <https://www.cbd.int/wgabs9/>.

sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización”, un texto con 31 artículos y 2 anexos. Este sería el segundo Protocolo al Convenio sobre la diversidad biológica, que ya cuenta con el Protocolo de Cartagena sobre seguridad biológica de 2000⁷.

En el artículo 1 de este proyecto de Protocolo se establece como objetivo el de asegurar “... la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes”. El ámbito de aplicación del Protocolo se regula en el artículo 3 estableciendo que el Protocolo se aplicará a los recursos genéticos comprendidos en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica y a los beneficios que se deriven de la utilización de dichos recursos y que se aplicará también a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y a los beneficios que se deriven de la utilización de dichos conocimientos.

El artículo 4 regula la participación justa y equitativa en los beneficios de manera que los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados se compartirán de manera justa y equitativa con la Parte que aporta dichos recursos o, si procede, con las comunidades indígenas y locales que son titulares de dichos recursos o conocimientos tradicionales asociados. En el Anexo I al proyecto de Protocolo se lista los beneficios monetarios y no monetarios que pueden obtenerse. Al respecto, las Partes deben adoptar las medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para asegurar que los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, inclusive de los derivados se compartan de manera justa y equitativa con el país que aporta dichos recursos, de acuerdo con la lista de utilizaciones comunes de recursos genéticos del anexo II.

El artículo 5 regula el acceso a los recursos genéticos y los somete al consentimiento fundamentado previo de la Parte que aporta dichos recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa, de acuerdo con el ejercicio de sus derechos soberanos sobre sus recursos genéticos. La prestación de este consentimiento debe comunicarse al Centro de Intercambio de Información sobre Acceso y Participación en los Beneficios establecido en virtud del

⁷ El Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el 29 de enero de 2000 (39 *ILM* 1027) entró en vigor el 11 de septiembre del 2003. El instrumento de ratificación de España se publicó en *BOE* núm. 181, 30 de julio de 2003.

artículo 11. De acuerdo con el Protocolo, consentir el acceso presupone unas condiciones previas: las Partes deben proporcionar certidumbre legal, claridad y transparencia en sus requisitos nacionales de acceso y participación en los beneficios, así como facilitar toda la información que pueda obtenerse fácilmente acerca de cómo solicitar el consentimiento fundamentado previo. Asimismo, el Protocolo indica que las Partes deben estipular una autoridad nacional competente para la emisión de una decisión por escrito oportuna y emitir un permiso o certificado reconocido internacionalmente como prueba de la decisión de otorgar el consentimiento fundamentado previo. El Protocolo supedita el otorgamiento consentimiento fundamentado previo/aprobación y participación de las comunidades indígenas y locales para el acceso a sus recursos genéticos al reconocimiento por parte de la legislación nacional de los derechos existentes de estas comunidades indígenas y locales sobre los recursos genéticos. Asimismo, la legislación nacional determinará los criterios de ejercicio de este consentimiento.

Las Partes deben regular mediante normas y procedimientos claros para solicitar el acceso y para establecer en condiciones mutuamente acordadas en el momento del acceso. Estas condiciones se estipularán por escrito y deben comprender: a) una cláusula sobre resolución de controversias; b) las condiciones de participación en los beneficios, con inclusión de todos los derechos de propiedad o propiedad intelectual; c) las condiciones sobre el uso subsiguiente de parte de terceros, si lo hubiera; y d) las condiciones de cambio de intención.

El artículo 5bis establece que las Partes aseguren el acceso a conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos en posesión de las comunidades indígenas y locales con el consentimiento fundamentado previo/la aprobación y la participación de las comunidades indígenas y locales, y sobre la base de condiciones mutuamente acordadas.

El artículo 6 regula las consideraciones relativas a la promoción de la investigación relacionada con la diversidad biológica que resulte importante para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes y las situaciones de emergencia, incluidas las amenazas graves a la salud pública, la seguridad alimentaria o la diversidad biológica, de acuerdo con la legislación nacional.

El artículo 7 intenta promover que los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos reviertan en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica para apoyar los objetivos del Convenio.

La protección de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos se regula en el artículo 9 cuando se exhorta a las Partes que tengan debidamente en cuenta las leyes de las comunidades indígenas y locales, las leyes consuetudinarias, los protocolos y procedimientos comunitarios de las comunidades indígenas y locales, según proceda, respecto a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y que con la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales pertinentes, se establezcan mecanismos para informar a los posibles usuarios de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos acerca de sus obligaciones respecto al acceso a dichos conocimientos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los mismos. Las Partes en todo caso apoyarán el desarrollo, de parte de las comunidades indígenas y locales, de protocolos comunitarios en relación con los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, de los requisitos mínimos para las condiciones mutuamente acordadas que garanticen la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos; y de cláusulas contractuales modelo para la participación en los beneficios que se deriven de la utilización de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos. Asimismo, las Partes alentarán a los usuarios de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos públicamente disponibles a tomar todas las medidas razonables, incluida la diligencia debida, para concertar arreglos de participación justa y equitativa en los beneficios con los titulares legítimos de dichos conocimientos.

Los artículos 10 y 11 se regulan los puntos focales y las autoridades nacionales competentes y el Centro de intercambio de información sobre acceso y participación en los beneficios e intercambio de información, como mecanismos institucionales de control de la información relativa al acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios.

Los artículos siguientes, del 12 a 14, se complementan en el sentido que abordan las cuestiones relativas a asegurar que se haya accedido y que se utilicen los recursos genéticos conforme al consentimiento fundamentado previo, y las condiciones mutuamente acordadas, garantizando así el cumplimiento de la legislación nacional sobre acceso y participación en

los beneficios del país que aporta. Este cumplimiento se asegura, según el art. 13, mediante la vigilancia, seguimiento y presentación de informes de la utilización de recursos genéticos. El artículo 14 hace especial hincapié al cumplimiento de las condiciones mutuamente acordadas mediante la determinación de la jurisdicción a la que se someterán todos los procesos de resolución de controversias; la ley aplicable; y/u opciones para la resolución de controversias alternativa, tales como mediación o arbitraje.

Respecto a los términos contractuales que deben regir el acceso y reparto justo y equitativo, el artículo 15 encarga a las Partes el desarrollo de menús sectoriales de cláusulas contractuales modelo para determinar las condiciones mutuamente acordadas y el desarrollo, actualización y utilización de códigos de conducta y normas de prácticas óptimas, consultando tanto a usuarios como proveedores (art. 16). En ambos casos, la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo hará periódicamente un balance de su utilización. El artículo 17 propone un listado de medidas no exhaustivo con el objetivo que las Partes contribuyan al aumento de la concienciación acerca de la importancia de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales relacionados y de las cuestiones relativas al acceso y participación en los beneficios. Estas medidas son, por ejemplo: la promoción del presente Protocolo y su objetivo; la organización de reuniones de interesados directos; el establecimiento y mantenimiento de una mesa de ayuda para los interesados directos; la difusión de información por conducto de un centro de intercambio de información de nivel nacional; la promoción de códigos de conducta y normas de prácticas óptimas en consulta con los interesados directos; y la promoción de experiencias de intercambio regional.

Los artículos 18 y 19 hacen referencia a los mecanismos asistenciales de cumplimiento de los objetivos del Protocolo, mediante la creación de capacidades (art. 18), la transferencia de tecnológica (art. 18 bis) y el mecanismo financiero (art. 19). Respecto a la creación de capacidades, el Protocolo exhorta a las Partes a cooperar para desarrollar y fortalecer los recursos humanos y las capacidades institucionales para aplicar el Protocolo de manera efectiva en las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, y las Partes con economías en transición, incluso a través de las instituciones y organizaciones mundiales, regionales, subregionales y nacionales existentes. El apartado 4 del artículo 18 define que se debe entender por desarrollo de capacidades, a saber: a) capacidad para cumplir con las obligaciones en virtud del presente Protocolo; b) capacidad para negociar condiciones

mutuamente acordadas; c) capacidad para desarrollar, aplicar y hacer cumplir medidas legislativas, administrativas o de política nacionales sobre acceso y participación en los beneficios; y d) capacidad para brindar apoyo a los países que aportan recursos genéticos en el desarrollo de sus capacidades de investigación endógenas para añadir valor a sus propios recursos genéticos. Para ello, el apartado 5 propone una lista, a modo de ejemplo, de las medidas que pueden adoptar las Partes para contribuir a este desarrollo de capacidades: desarrollo jurídico e institucional; promoción de la igualdad en las negociaciones, tal como capacitación para negociar condiciones mutuamente acordadas; supervisión y observancia del cumplimiento; empleo de las mejores herramientas de comunicaciones y sistemas basados en Internet disponibles para las actividades de acceso y participación en los beneficios; desarrollo y uso de métodos de valoración; bioprospección, investigación relacionada y estudios taxonómicos; transferencia de tecnología, e infraestructura y capacidad técnica para que dicha transferencia de tecnología resulte sostenible; entre otras.

El artículo 18bis aborda la transferencia de tecnología y los aspectos relativos a la cooperación al desarrollo mediante la contribución de las Partes en programas de investigación científica y desarrollo, especialmente actividades de investigación biotecnológica, como un medio para generar y compartir beneficios. Esto incluye medidas que adopten los países desarrollados para incentivar a las compañías e instituciones de su jurisdicción para que faciliten el acceso a la tecnología de parte de los países en desarrollo, incluidos los menos adelantados entre ellos y la transferencia de tecnología a los mismos, a fin de permitirles crear una base tecnológica sólida y viable. El artículo 18bis in fine pone especial énfasis en que esta colaboración debe llevarse a cabo en el país que aporta los recursos genéticos.

De acuerdo con el artículo 19, el mecanismo financiero del Convenio será el mecanismo financiero para este Protocolo y por lo tanto se va a regir por las normas establecidas en el Convenio. La Reunión de las Partes, al aprobar las orientaciones financieras, deberá considerar la necesidad de recursos financieros de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo entre ellos, en particular sus esfuerzos por determinar y satisfacer sus requerimientos de creación de capacidad.

A continuación, el Protocolo recurre a la estructura institucional tradicional de los acuerdos multilaterales en materia de protección ambiental. Es decir, la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el presente Protocolo y como órgano supremo y rector del Protocolo (artículo 20), los órganos subsidiarios, como estructuras especializadas en aspectos científicos y técnicos, que no se determina el número y su naturaleza precisa, limitándose a establecer los órganos necesarios para el funcionamiento y logro de los objetivos del Protocolo (art. 21) y la secretaría, como institución de carácter administrativo y técnico, que será la misma secretaría del Convenio, como criterio lógico y de operatividad institucional (art. 22).

Respecto al control del cumplimiento, el artículo 24 se refiere a la vigilancia y a la presentación de informes. Las Partes deben vigilar el cumplimiento de sus obligaciones e informar a la Reunión de las Partes acerca de las medidas que hubieren adoptado para la aplicación del Protocolo. Además, se encarga a la Reunión de las Partes, que en su primera reunión examine y apruebe mecanismos institucionales y procedimientos de cooperación para promover el cumplimiento de las disposiciones del Protocolo y gestione los casos de incumplimiento. Estos mecanismos y procedimientos incluirán medidas de asesoramiento y ayuda al cumplimiento y se establecerán sin perjuicio de los medios de solución de controversias de la Convención.

El Protocolo no admite la formulación de reservas a su articulado (artículo 29) y prevé su entrada en vigor al nonagésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados u organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en el Convenio (artículo 29). En principio, esta restricción no debería ser un impedimento para las Partes en el Convenio sobre diversidad biológica, que ya reune a más de 190 Estados.

Este Protocolo representa un gran avance en el régimen internacional de protección de la diversidad biológica, especialmente significativo en el año que se celebra el Año Internacional sobre la biodiversidad. 18 años después de la Cumbre de la Tierra será posible compartir justa y equitativamente los beneficios derivados de la diversidad biológica combatiendo a prácticas tan generalizadas como la llamada “biopiratería”.

Sumari: 1. L'Acord de Copenhaguen. 2. El Projecte de protocol de Nagoya d'accés als recursos genètics i de participació justa i equitativa en els beneficis derivats de la seva utilització.

El capítol dedicat a la crònica jurídica internacional d'aquest primer número de la *Revista Catalana de Dret Ambiental* ofereix una anàlisi dels documents més significatius que s'han adoptat en els últims sis mesos: l'Acord de Copenhaguen i el Projecte de protocol de Nagoya d'accés als recursos genètics i de participació justa i equitativa en els beneficis derivats de la seva utilització. Aquests documents, en diferent mesura, representen un avanç en les negociacions internacionals en l'àmbit de dos règims de protecció del medi ambient, és a dir, el del canvi climàtic i el de la diversitat biològica. Encara que en si mateixos no representen documents internacionals jurídicament vinculants, constitueixen un desenvolupament significatiu d'aquests àmbits de regulació i una contribució considerable a la futura adopció d'acords multilaterals.

1. L'Acord de Copenhaguen

Els caps d'estat, caps de govern, ministres i altres caps de les delegacions presents a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 2009, realitzada a Copenhaguen del 7 al 18 de desembre de 2009, van adoptar l'Acord de Copenhaguen el 18 de desembre de 2009⁸. L'objectiu de la Conferència de Copenhaguen era aconseguir un acord, jurídicament vinculant, que permetés a les parts de la Convenció Marc sobre Canvi Climàtic⁹ i el Protocol de Kyoto¹⁰ assumir nous compromisos per reduir emissions de gasos d'efecte hivernacle per al període posterior al que estipula el Protocol de Kyoto, que expira el 2012, és a dir, a partir de 2013.

No obstant això, l'Acord de Copenhaguen es va adoptar a manera de decisió *taking note*, és a dir, “prenent en consideració”, cosa que reflecteix la manca de compromís jurídic, però amb

⁸ Conference of the Parties, Fifteenth session, Draft decision -/CP.15, Copenhagen, 7-18 December 2009. FCCC/CP/2009/L.7 18 December 2009. Disponible a http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf.

⁹ La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) va ser adoptada a Nova York el 9 de maig de 1992 i va entrar en vigor del 21 de març de 2004, 31 *ILM* 822. L'Instrument de Ratificació d'Espanya es va publicar en el *BOE* d'1 de febrer de 1994.

¹⁰ El Protocol de Kyoto a la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, fet a Kyoto l'11 de desembre de 1997 (37 *ILM* 22 (1998)) va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005. L'Instrument de Ratificació d'Espanya es va publicar al *BOE* 8 de febrer de 2005, Núm. 33.

voluntat d'aconseguir l'objectiu que estableix l'article 2 de la Convenció Marc sobre Canvi Climàtic, això és, l'estabilització de les concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera en un nivell que impedeixi interferències antropògenes perilloses en el sistema climàtic i per permetre que els ecosistemes s'adaptin naturalment al canvi climàtic, assegurar que la producció d'aliments no es vegi amenaçada i permetre que el desenvolupament econòmic continuï de manera sostenible.

L'acord es divideix en dotze apartats, entre els quals hi ha sis declaracions, i les sis restants són compromisos.

Els tres primers apartats són declaracions. En la primera, després de reconèixer que el canvi climàtic és un dels desafiaments més grans del nostre temps, es remarca la voluntat política de combatre el canvi climàtic de forma urgent, d'acord amb el principi de responsabilitats comunes però diferenciades, i amb les capacitats respectives. Per aconseguir l'objectiu últim de la convenció, reconeixent el punt de vista científic que l'augment de la temperatura mundial hauria de ser inferior a 2°C, i d'acord amb l'equitat i el desenvolupament sostenible, es constata la necessitat de millorar la cooperació a llarg termini per combatre el canvi climàtic i, per això, es proposa establir un programa d'adaptació global que inclogui el suport internacional, conscients dels impactes crítics del canvi climàtic i dels impactes potencials de les mesures de resposta als països particularment vulnerables als efectes adversos.

La segona declaració es refereix a la necessitat de reduir dràsticament les emissions mundials per mantenir l'augment de la temperatura global per sota de 2°C, d'acord amb la ciència i sobre la base de l'equitat, i tenint en compte que el desenvolupament social i econòmic i l'eradicació de la pobresa són prioritats bàsiques i fonamentals dels països en desenvolupament. Segons aquest acord, la cooperació ha de permetre aconseguir el pic màxim d'emissions mundials i nacionals tan aviat com sigui possible, i ha de reconèixer que el termini per aconseguir-lo és més llarg als països en desenvolupament i que l'estratègia d'emissions baixes és indispensable per al desenvolupament sostenible.

La tercera declaració fa referència que els països desenvolupats han de proporcionar als països en desenvolupament tant recursos financers adequats com tecnologia i creació de capacitat. Aquesta provisió de recursos permetria a aquests països adaptar-se millor als efectes adversos del canvi climàtic i als impactes potencials de les mesures de resposta. Es constata la necessitat urgent de reforçar l'actuació i la cooperació internacional en matèria d'adaptació

per garantir l'aplicació de la convenció, per facilitar mesures d'adaptació dirigides a reduir la vulnerabilitat dels països en desenvolupament i donar-hi suport, especialment als que són particularment vulnerables i, sobretot, als països menys avançats, als estats insulars en desenvolupament i a Àfrica.

El quart apartat es reflecteix com a compromís de presentació d'objectius de reducció per als països desenvolupats (parts de l'annex I), no de la seva execució. En concret, fa referència que els països desenvolupats es comprometen a executar els objectius quantificats d'emissió per a 2020 que s'han de presentar abans del 31 de gener de 2010. L'acord estableix en aquest compromís que les parts de l'annex I que són parts del Protocol de Kyoto han d'enfortir encara més la reducció de les emissions iniciada amb el Protocol de Kyoto. El compromís de reduccions i el finançament per part dels països desenvolupats han de ser mesures que s'han de comprovar i verificar, de conformitat amb les directrius actuals i amb les que ha d'adoptar la Conferència de les Parts, i s'ha d'assegurar que la comptabilitat d'aquests objectius i el finançament siguin rigorosos, sòlids i transparents.

El cinquè apartat és una declaració segons la qual els països en desenvolupament (parts no-annex I) de la Convenció han d'aplicar mesures de mitigació, incloent les que les parts han de presentar a Secretaria abans del 31 de gener de 2010. Respecte als països menys avançats i als estats insulars petits, poden emprendre accions de manera voluntària i amb suport internacional. Les mesures que requereixen suport internacional estan subjectes al mesurament internacional, la notificació i la verificació, de les quals s'ha d'informar a través de les comunicacions nacionals cada dos anys, d'acord amb les directrius aprovades per la Conferència de les Parts. En concret, l'acord estableix que les mesures de mitigació que s'adoptin posteriorment i les que les parts no-annex I prevegin, inclosos els informes d'inventari nacional, s'han de comunicar a través de les comunicacions nacionals de conformitat amb l'article 12.1 (b) cada dos anys, basant-se en les directrius que ha d'adoptar la Conferència de les Parts. Les parts no-annex I han de comunicar la informació sobre l'execució de les accions a través de les comunicacions nacionals, amb disposicions per realitzar consultes i ànalisis internacionals en virtut de directrius clarament definides que han d'assegurar el respecte de la sobirania nacional. Les mesures de mitigació nacionals apropiades que requereixin suport internacional s'han d'inscriure en el registre junt amb la tecnologia pertinent, el finançament i el suport a la creació de capacitat.

L'apartat sisè és una declaració en què es reconeix el paper fonamental de la reducció d'emissions procedents de la desforestació i de la degradació forestal i en què les parts estan d'acord amb la necessitat d'ofrir incentius positius a aquestes accions mitjançant l'establiment immediat d'un mecanisme que inclogui REDD-plus (reducció d'emissions procedents de la desforestació tal com es va definir en el full de ruta de Bali), per permetre mobilitzar recursos financers des dels països desenvolupats.

L'apartat setè també és una declaració en què s'estableix l'aplicació de criteris diferents, incloent les oportunitats d'utilització dels mercats, a fi de millorar la relació cost-eficàcia de les mesures de mitigació, i promoure-les. Segons aquesta declaració, els països en desenvolupament, especialment els que tenen economies amb baixa emissió, han de proporcionar incentius per continuar desenvolupant un camí amb emissions baixes.

L'apartat vuitè de l'acord és el compromís de finançament dels països desenvolupats de proporcionar als països en desenvolupament uns 30.000 milions de dòlars per al període 2010-2012 i com a meta aconseguir de forma progressiva 100.000 milions de dòlars cada l'any el 2020 per atendre les necessitats dels països en desenvolupament i a fi de millorar l'acció sobre la mitigació i donar-hi suport, incloent el finançament substancial per reduir les emissions derivades de la desforestació i la degradació forestal (REDD-Plus), l'adaptació, el desenvolupament i la transferència de tecnologia i la creació de capacitat, per millorar l'aplicació de la convenció. Segons l'Acord, aquest és un compromís col·lectiu dels països desenvolupats de proporcionar recursos nous i addicionals, inclosa la silvicultura i les inversions a través d'institucions internacionals amb un repartiment equilibrat entre l'adaptació i la mitigació. El finançament per a l'adaptació serà prioritari per als països en desenvolupament més vulnerables, com són els països menys avançats, els estats insulars petits i Àfrica. Aquest compromís de finançament s'ha d'articular mitjançant fons provinents d'una àmplia varietat de fonts, públiques i privades, bilaterals i multilaterals, incloses les fonts alternatives de finançament. L'Acord proposa un nou finançament multilateral per a l'adaptació que s'ha de proporcionar a través d'accords financers eficaços i eficients, amb una estructura de gestió que preveu la igualtat de representació dels països desenvolupats i en de desenvolupament. Una part significativa d'aquest finançament ha de fluir a través del Fons Verd del Clima de Copenhaguen.

L'apartat novè estableix el compromís de les parts a crear un Grup d'Alt Nivell per estudiar la contribució de les fonts potencials d'ingressos, incloses les fonts alternatives de finançament, per complir aquest objectiu.

L'apartat 10 defineix el compromís de les parts a crear el Fons Verd del Clima de Copenhaguen, que s'ha de constituir com una entitat operativa del mecanisme financer de la convenció per donar suport a projectes, programes, polítiques i a altres activitats, als països en desenvolupament, relacionades amb la mitigació, com són el REDD-Plus, l'adaptació, la creació de capacitat i el desenvolupament i la transferència de tecnologia.

Junt amb el compromís financer, el punt 11 estableix el compromís de fixar un mecanisme de tecnologia, a fi de millorar l'acció en el desenvolupament i la transferència de tecnologia, tenint en compte l'enfocament impulsat pels països i s'ha de basar en les circumstàncies i les prioritats nacionals per donar suport a les mesures d'adaptació i de mitigació.

Finalment, l'Acord acaba amb un compromís difús, d'acord amb el qual el 2015 s'ha d'avaluar l'aplicació d'aquest acord, i dóna a entendre que es podrien establir mesures d'enfortiment de la meta a llarg termini, tenint en compte els diversos afers presentats per la ciència per reduir l'augment màxim de la temperatura global de 2°C a 1,5°C.

Amb tot, resulta decebedor que els esforços realitzats al llarg de tants anys de negociacions climàtiques dirigides a aconseguir un compromís global i jurídicament vinculant hagin conclòs amb un text anomenat *acord*, la natura jurídica i el contingut del qual denoten, precisament, la manca de compromís jurídic. La vaguetat dels termes amb què es redacta aquest acord no és res més que la constatació, d'una banda, de la realitat frustrant, en particular, per als països més vulnerables a les conseqüències del canvi climàtic; I, de l'altra, de la conveniència dels països reticents a realitzar renúncies o contraprestacions amb relació al que se suposa que és l'amenaça més gran a què s'enfronta la humanitat. Al cap i a la fi, el medi ambient no es protegeix amb meres declaracions d'intencions, ni, com és el cas, amb “prendre nota” d'una realitat més que evident.

2. El Projecte de protocol de Nagoya d'accés als recursos genètics i de participació justa i equitativa en els beneficis derivats de la seva utilització

En virtut del Conveni sobre la diversitat biològica de 1992¹¹ es reconeix la sobirania dels estats sobre els recursos naturals en àrees de la seva jurisdicció, és a dir, les parts del Conveni tenen la potestat per determinar l'accés als recursos genètics en àrees de la seva jurisdicció. Concretament, la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics és un dels tres objectius fonamentals del Conveni, i, a més a més, l'article 15 reconeix expressament l'accés als recursos genètics i la participació en els beneficis que es derivin de la seva utilització. Aquesta disposició es va detallar en la decisió VI/24 de la Conferència de les Parts en el Conveni sobre la diversitat biològica en què es van adoptar les Directrius de Bonn sobre l'accés als recursos genètics i la distribució justa i equitativa dels beneficis provinents de la seva utilització. També, el pla d'aplicació adoptat per la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible (Johannesburg, setembre de 2002), va exhortar les parts a prendre mesures per negociar, en el marc del Conveni sobre la diversitat biològica i tenint presents les Directrius de Bonn, la creació d'un règim internacional per promoure i salvaguardar de forma eficaç la distribució justa i equitativa dels beneficis derivats de la utilització dels recursos genètics.

Seguint aquest mandat, en la novena reunió del grup de treball sobre l'accés i la participació justa en els beneficis (WGABS 9) que es va realitzar a Cali (Colòmbia) del 22 al 28 de març 2010¹², havent estat l'última de tres reunions previstes per mandat de la novena reunió de la Conferència de les Parts, realitzada a Bonn (Alemanya) al maig de 2008, es van ultimar les negociacions d'un règim internacional sobre l'accés als recursos genètics i de participació justa i equitativa en els beneficis derivats de la seva utilització, que s'ha d'adoptar d'acord amb la Decisió IX/35, en la desena reunió de la Conferència de les Parts (COP 10), que tindrà lloc a Nagoya (Japó) a l'octubre de 2010¹³. El resultat és el Projecte revisat de protocol al Conveni sobre la diversitat biològica sobre accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la seva utilització, un text amb 31 articles i 2

¹¹ La Convenció de Nacions Unides sobre la Diversitat Biològica, de 5 de juny de 1992 (31 ILM 818) va entrar en vigor el 29 de desembre de 1993). L'Instrument de ratificació d'Espanya és del 16 de novembre de 1993 i es va publicar al BOE, d'1 de febrer de 1994. Més informació: <http://www.cbd.int/>.

¹² *Report of the First Part of the Ninth Meeting of the Ad Hoc Open Ended Working Group On Access and Benefit-Sharing*, UNEP/CBD/WG-ABS/9/3.

¹³ El text del projecte de protocol està disponible a: <https://www.cbd.int/wgabs9/>.

annexos. Aquest seria el segon protocol en el Conveni sobre la diversitat biològica, que compta amb el Protocol de Cartagena sobre seguretat biològica de 2000¹⁴.

L'article 1 d'aquest projecte de protocol estableix com a objectiu assegurar “la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics, contribuint a la conservació de la diversitat biològica i a la utilització sostenible dels seus components”. L'àmbit d'aplicació del protocol es regula en l'article 3, que estableix que el protocol s'ha d'aplicar als recursos genètics que comprén l'àmbit del Conveni sobre la diversitat biològica i als beneficis que es deriven de la utilització d'aquests recursos i que s'ha d'aplicar també als coneixements tradicionals associats a recursos genètics i als beneficis que es deriven de la utilització dels coneixements.

L'article 4 regula la participació justa i equitativa en els beneficis, de manera que els beneficis que es deriven de la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals associats s'han de compartir de manera justa i equitativa amb la part que aporta els recursos o, si s'escau, amb les comunitats indígenes i locals titulars dels recursos o coneixements tradicionals associats. L'annex I del projecte de protocol llista els beneficis monetaris i no monetaris que poden obtenir-se. Respecte d'això, les parts han d'adoptar les mesures legislatives, administratives o de política, si escau, per assegurar que els beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics, inclusivament dels derivats, es comarteixin de manera justa i equitativa amb el país que n'aporti els recursos, d'acord amb la llista d'utilitzacions comunes de recursos genètics de l'annex II.

L'article 5 regula l'accés als recursos genètics i els sotmet al consentiment fonamentat previ de la part que els aporta, llevat que aquesta part decideixi una altra cosa, d'acord amb l'exercici dels drets sobirans sobre els recursos genètics. La prestació d'aquest consentiment ha de comunicar-se al Centre d'Intercanvi d'Informació sobre Accés i Participació en els Beneficis establert en virtut de l'article 11. D'acord amb el protocol, consentir l'accés pressuposa condicions prèvies: les parts han de proporcionar certesa legal, claredat i transparència en els requisits nacionals d'accés i de participació en els beneficis, i han de facilitar tota la informació que pugui obtenir-se fàcilment sobre la manera com sol·licitar el consentiment fonamentat previ. Així mateix, el protocol indica que les parts han d'estipular

¹⁴ El Protocol de Cartagena sobre seguretat de la biotecnologia del Conveni sobre la Diversitat Biològica, fet a Montreal el 29 de gener de 2000 (39 *ILM* 1027) va entrar en vigor l'11 de setembre del 2003. L'Instrument de ratificació d'Espanya es va publicar en el *BOE*, 30 de juliol de 2003.

una autoritat nacional competent per emetre una decisió per escrit oportuna i emetre un permís o certificat reconegut internacionalment com a prova de la decisió d'atorgar el consentiment fonamentat previ. El protocol supedita l'atorgament consentiment fonamentat previ/aprovació i participació de les comunitats indígenes i locals per accedir als seus recursos genètics al reconeixement per part de la legislació nacional dels drets d'aquestes comunitats indígenes i locals sobre els recursos genètics. Així mateix, la legislació nacional ha de determinar els criteris d'exercici d'aquest consentiment.

Les parts han de regular mitjançant normes i procediments clars per sol·licitar l'accés i per establir en condicions acordades mútuament en el moment de l'accés. Aquestes condicions s'han d'estipular per escrit i han de comprendre: a) Una clàusula sobre resolució de controvèrsies; b) Les condicions de participació en els beneficis, incloent-hi tots els drets de propietat o propietat intel·lectual; c) Les condicions sobre l'ús subsegüent de part de tercers, si n'hi hagués; d) Les condicions de canvi d'intenció.

L'article 5bis estableix que les parts han d'assegurar l'accés als coneixements tradicionals associats a recursos genètics en possessió de les comunitats indígenes i locals amb el consentiment fonamentat previ/l'aprovació i la participació de les comunitats indígenes i locals, i sobre la base de condicions acordades mútuament.

L'article 6 regula les consideracions relatives a promoure la investigació relacionada amb la diversitat biològica que sigui important per conservar la diversitat biològica i la utilització sostenible dels seus components i les situacions d'emergència, incloses les amenaces greus a la salut pública, la seguretat alimentària o la diversitat biològica, d'acord amb la legislació nacional.

L'article 7 intenta promoure que els beneficis que es derivin de la utilització de recursos genètics revertixin en la conservació i la utilització sostenible de la diversitat biològica per donar suport als objectius del Conveni.

La protecció dels coneixements tradicionals associats a recursos genètics es regula en l'article 9 quan s'exhorta les parts que tinguin degudament en compte les lleis de les comunitats indígenes i locals, les lleis consuetudinàries, els protocols i procediments comunitaris de les comunitats indígenes i locals, si escau, respecte als coneixements tradicionals associats a recursos genètics, i que, amb la participació efectiva de les comunitats indígenes i locals pertinents, s'estableixin mecanismes per informar els possibles usuaris de coneixements tradicionals associats a recursos genètics sobre les seves

obligacions respecte a l'accés a aquests coneixements i a la participació justa i equitativa en els beneficis que se'n derivin. Les parts, en tot cas, han de donar suport al desenvolupament de protocols comunitaris, de part de les comunitats indígenes i locals, amb relació als coneixements tradicionals associats a recursos genètics i a la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la seva utilització, dels requisits mínims per a les condicions mútuament acordades que garanteixin la participació justa i equitativa en els beneficis que es derivin de la utilització de coneixements tradicionals associats a recursos genètics; i de clàusules contractuals model per participar en els beneficis que es derivin de la utilització dels coneixements tradicionals associats a recursos genètics. Així mateix, les parts han d'encoratjar els usuaris de coneixements tradicionals associats a recursos genètics públicament disponibles a prendre totes les mesures raonables, la diligència corresponent inclosa, per concertar arreglaments de participació justa i equitativa en els beneficis amb els titulars legítims d'aquests coneixements.

Els articles 10 i 11 regulen els punts focals i les autoritats nacionals competents i el Centre d'Intercanvi d'Informació sobre accés i participació en els beneficis i intercanvi d'informació, com a mecanismes institucionals de control de la informació relativa a l'accés als recursos genètics i participació justa i equitativa en els beneficis.

Els articles següents, del 12 al 14, es complementen en el sentit que aborden les qüestions relatives a assegurar que s'hagi accedit als recursos genètics i s'utilitzin d'acord amb els fonaments previs i les condicions mútuament acordades, i es garanteixi així el compliment de la legislació nacional sobre l'accés i la participació en els beneficis del país que aporta. Aquest compliment s'assegura, segons l'art. 13, mitjançant la vigilància, el seguiment i la presentació d'informes de la utilització de recursos genètics. L'article 14 fa especial insistència en el compliment de les condicions acordades mútuament mitjançant la determinació de la jurisdicció a què se s'han de sotmetre tots els processos de resolució de controvèrsies; la llei aplicable; o opcions per a la resolució alternativa de controvèrsies, com ara la mediació o l'arbitratge.

Respecte als termes contractuals que han de regir l'accés i el repartiment just i equitatiu, l'article 15 encarrega a les parts que desenvolupin menús sectorials de clàusules contractuals model per determinar les condicions acordades mútuament i el desenvolupament, l'actualització i la utilització de codis de conducta i de normes de pràctiques òptimes, consultant tant usuaris com proveïdors (art. 16). En ambdós casos, la Conferència de les Parts que actua com a reunió de les parts en el protocol n'ha de fer un balanç de la utilització periòdicament. L'article 17 proposa un llistat de mesures no exhaustiu amb l'objectiu que les parts contribueixin a augmentar la conscienciació sobre la importància dels recursos genètics i

coneixements tradicionals relacionats i de les qüestions relatives a l'accés dels beneficis i a la participació en els beneficis. Aquestes mesures són, per exemple: la promoció del present protocol i del seu objectiu; l'organització de reunions d'interessats directes; l'establiment i el manteniment d'una taula d'ajuda per als interessats directes; la difusió d'informació per conducte d'un centre d'intercanvi d'informació des del punt de vista nacional; la promoció de codis de conducta i de normes de pràctiques òptimes consultant els interessats directes; i la promoció d'experiències d'intercanvi regional.

Els articles 18 i 19 fan referència als mecanismes assistencials de compliment dels objectius del protocol, mitjançant la creació de capacitats (art. 18), la transferència tecnològica (art. 18 bis) i el mecanisme financer (art. 19). Respecte a la creació de capacitats, el protocol exhorta les parts a cooperar per desenvolupar i enfortir els recursos humans i les capacitats institucionals per aplicar el protocol de manera efectiva a les parts que són països en desenvolupament, en particular als països menys avançats i als estats insulars petits en desenvolupament, i a les parts amb economies en transició, fins i tot a través de les institucions i organitzacions mundials, regionals, subregionals i nacionals. L'apartat 4 de l'article 18 defineix que s'ha d'entendre per *desenvolupament de capacitats*: *a) La capacitat per complir amb les obligacions en virtut del present protocol; b) La capacitat per negociar condicions acordades mútuament; c) La capacitat per desenvolupar, aplicar i fer complir mesures legislatives, administratives o de política nacionals sobre accés i participació en els beneficis; d) La capacitat per oferir suport als països que aporten recursos genètics en el desenvolupament de les capacitats d'investigació endògenes per afegir valor als seus propis recursos genètics.* Per això, l'apartat 5 proposa una llista, a manera d'exemple, de les mesures que poden adoptar les parts per contribuir a aquest desenvolupament de capacitats: desenvolupament jurídic i institucional; promoció de la igualtat en les negociacions, com la capacitació per negociar condicions acordades mútuament; la supervisió i l'observança del compliment; l'ocupació de les millors eines de comunicacions i sistemes basats en Internet disponibles per a les activitats d'accés i participació en els beneficis; el desenvolupament i l'ús de mètodes de valoració; la bioprospecció, la investigació relacionada i els estudis taxonòmics; la transferència de tecnologia, i la infraestructura i la capacitat tècnica perquè aquesta transferència de tecnologia resulti sostenible; entre d'altres.

L'article 18 bis aborda la transferència de tecnologia i els aspectes relatius a la cooperació al desenvolupament mitjançant la contribució de les parts en programes d'investigació científica i desenvolupament, especialment activitats d'investigació biotecnològica com a mitjà per generar i compartir beneficis. Això inclou les mesures que han d'adoptar els països desenvolupats per incentivar les companyies i institucions de la seva jurisdicció perquè facilitin l'accés a la tecnologia a part dels països en desenvolupament, entre els quals els menys avançats, i la transferència de tecnologia, a fi de

permetre'ls que creïn una base tecnològica sòlida i viable. L'article 18bis *in fine* posa especial èmfasi que aquesta col·laboració ha de dur-se a terme al país que aporta els recursos genètics.

D'acord amb l'article 19, el mecanisme financer del Conveni és el mecanisme financer per a aquest protocol i, per tant, es regeix per les normes del Conveni. La reunió de les parts, quan aprovi les orientacions financeres, haurà de considerar la necessitat de recursos financers de les parts que són països en desenvolupament, entre els quals, els països menys avançats i dels estats insulars petits en desenvolupament, en particular dels seus esforços per determinar i satisfer els requeriments de creació de capacitat.

A continuació, el protocol recorre a l'estructura institucional tradicional dels acords multilaterals en matèria de protecció ambiental. És a dir, la Conferència de les Parts que actua com a reunió de les parts en el present protocol i com a òrgan suprem i rector del protocol (article 20), els òrgans subsidiaris, com a estructures especialitzades en aspectes científics i tècnics, que no es determina el nombre ni la seva natura, limitant-se a establir els òrgans necessaris per al funcionament i l'èxit dels objectius del protocol (art. 21) i la Secretaria, com a institució de caràcter administratiu i tècnic, que ha de ser la mateixa secretaria del conveni, com a criteri lògic i d'operativitat institucional (art. 22).

Respecte al control del compliment, l'article 24 fa referència a la vigilància i a la presentació d'informes. Les parts han de vigilar el compliment de les seves obligacions i informar la Reunió de les Parts sobre les mesures que han d'adoptar per aplicar el protocol. A més a més, la Reunió de les Parts en la primera reunió ha d'examinar i aprovar mecanismes institucionals i procediments de cooperació per promoure el compliment de les disposicions del protocol i ha de gestionar els casos d'incompliment. Aquests mecanismes i procediments han d'incloure mesures d'assessorament i ajuda al compliment i s'han d'establir sense perjudici dels mitjans de solució de controvèrsies de la convenció.

El protocol no admet cap formulació de reserves en l'articulat (article 29) i en preveu l'entrada en vigor al dia norantè a partir de la data en què els estats o organitzacions regionals d'integració econòmica que siguin parts en el conveni hagin dipositat el cinquantè instrument de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió (article 29). En principi, aquesta restricció no hauria de ser cap impediment per a les parts en el Conveni sobre diversitat biològica, que ja reuneix més de 190 estats.

Aquest protocol representa un gran avanç en el règim internacional de protecció de la diversitat biològica, especialment significatiu l'any que se celebra l'Any Internacional de la Biodiversitat. Divuit anys després de la Cimera de la Terra es podran compartir justament i equitativament els beneficis derivats de la diversitat biològica, combatent pràctiques tan generalitzades com l'anomenada *biopirateria*.